

**PSOE**

**BALANCE DE UN AÑO DEL PP**  
EL AÑO DEL RECORTE  
Y DEL ENGAÑO.

**INFORME**

Diciembre, 2012

## INDICE

INTRODUCCIÓN	2
ERRORES: RAJOY Y SU GOBIERNO HAN HUNDIDO LA CONFIANZA EN ESPAÑA	5
El error de ejecutar una política económica que ha alimentado la espiral de crisis	5
Imprudencias y torpezas	8
RECORTE TRAS RECORTE: DESMONTANDO EL ESTADO DE BIENESTAR	11
El primer recorte. RDL de 30 de diciembre de 2011	12
El segundo recorte. Los Presupuestos de 2012	12
El tercer recorte. 10.000 millones menos para Educación y Sanidad	13
El cuarto recorte. 65.000 millones menos en los Presupuestos de 2012 a 2014	14
El quinto recorte. Los PGE del 2013: más de lo mismo	14
LO CONTRARIO DE LO QUE PROMETIERON	17
Subida de impuestos	18
Recortes	18
Pensiones: no se actualizan	19
Ataque a los funcionarios	20
Malestar social	21
Calidad democrática	22
Altos cargos	23
Opacidad	23
EXTREMADAMENTE CONSERVADORES	25
Reforma Laboral	25
Desahucios	26
Recortes en el Sistema Público de Salud	27
Educación y Universidad: menos recursos y descenso en la calidad	28
Desmantelamiento del Sistema de Dependencia	31
Dificultades para cooperar con las Comunidades autónomas	33
Golpe institucional en RTVE	34
Igualdad	36
Reforma de la Ley del aborto	37
El fin de la Justicia gratuita	38
Medio Ambiente	39

## INTRODUCCIÓN

Ha transcurrido un año desde que en España gobierna el PP. Tiempo para una política económica que está poniendo en riesgo la cohesión social de nuestro país. Es, sin lugar a dudas, el rasgo más sobresaliente de la gestión, radicalmente opuesta a los compromisos electorales adquiridos, del Gobierno de Rajoy que ha optado por la dureza de una política que deteriora los principales indicadores económicos empobreciendo a la sociedad española.

La crisis, y sus repercusiones en la vida de los ciudadanos, al contrario que alejarse, se ha hecho aún más intensa y cruda en España con el Gobierno del PP.

A la dirección equivocada en el desarrollo de la estrategia económica, que ha optado por el recorte sin contrapartidas en términos de estímulos al crecimiento, es indispensable unir los errores, torpezas y contradicciones en los que el Gobierno del PP ha incurrido en tan escaso tiempo y que no han hecho más que agravar la situación. Desde el retraso partidista de sus primeros Presupuestos y el fallido pulso del Presidente del Gobierno a la Unión Europea en relación al calendario de consolidación fiscal, hasta la nefasta gestión de la crisis financiera, los ciudadanos españoles se han encontrado con un Ejecutivo que ha improvisado constantemente y que solo ha añadido una grave desconfianza a la complicada situación económica del país.

Es ya evidente que el PP carecía de un plan para salir de la crisis pero si tenía claro que utilizaría a ésta como excusa para imponer contrarreformas políticas y económicas que suponen el desmantelamiento de los logros sociales de décadas y un muy importante paso atrás en el terreno de los derechos de la sociedad española.

En el año 2012, la economía española ha entrado, de nuevo, en recesión. La tasa de paro no ha dejado de crecer. La prima de riesgo ha llegado a máximos históricos más allá de los 600 puntos y ha permanecido siempre por encima de los niveles de 2011. Se están cerrando empresas y destruyendo puestos de

trabajo en todos los sectores y actividades hasta atesorar el record histórico en la tasa de paro. Se han eliminado las inversiones productivas y paralizado las infraestructuras. Y, para mayor alarma, la propia Comisión Europea ha pulverizado, a peor, las ya de por sí modestas previsiones económicas del Gobierno para el próximo año.

Este no es un camino de sufrimiento para llegar a la *tierra prometida* sino *el viaje a ninguna parte* de una economía que no ha hecho sino contraerse a lo largo de todo el año.

Las grandes reformas que precisa España se han quedado en una serie sucesiva de parches legislativos aprobados en solitario y por Decreto - Ley. El Gobierno ha carecido de una visión de conjunto, de una acción integrada en el marco de una estrategia europea de salida de la crisis.

Si esta situación económica es muy grave en sí misma, también lo es el desmontaje al que se está sometiendo al Estado de Bienestar.

Sanidad, educación, pensiones... todas las piezas cruciales sobre las que se configura el Estado de Bienestar han sido objeto de ataques por parte del Gobierno ya no solo en forma de recortes lesivos sino también de operaciones que desmontan el propio andamiaje sobre el que han sido construidas, y que van a dañar gravemente la cohesión social del país.

Las actuaciones del Gobierno en educación, sanidad, derechos de los trabajadores, servicios sociales o dependencia están causando un daño irreparable a la sociedad española. Después de las políticas aplicadas por Mariano Rajoy, la sanidad española y la educación no volverán a ser las mismas. Tardaremos muchos años en recuperar los estándares de calidad y los niveles de las prestaciones. Para el Estado de Bienestar ya hay un antes y un después de la llegada de Rajoy a La Moncloa.

Es cierto que el agravamiento de la crisis en el año 2012, ha restado visibilidad a otras políticas emprendidas en este tiempo, pero no nos debe impedir

concluir que en materia de educación, de derechos ciudadanos, de igualdad, se ha acusado una regresión protagonizada por una derecha que, lejos de la moderación, ha optado por su versión más dura restringiendo derechos que se habían conquistado en nuestro país. Reforma de la Ley del Aborto, apoyo a la segregación en las aulas, cambios en Educación para la Ciudadanía, reformas del Código Penal incorporando una versión de cadena perpetua... son trazos que nos hablan a las claras de que, en materia de derechos y libertades, la derecha sigue instalada en un conservadurismo de viejo cuño que nada tiene que ver con la realidad de una sociedad moderna como la española.

Y, para finalizar, el Gobierno ha querido afrontar el período más complicado de nuestra reciente historia en la más absoluta soledad. Salvo en contadas ocasiones, ha renunciado al diálogo: ni con la oposición, ni con los sindicatos, ni con las Comunidades Autónomas. Siempre en busca de alguien a quien echarle la culpa en lugar de un aliado para sumar esfuerzos.

Un año de Gobierno de Rajoy que queda retratado por sus propias decisiones, por la forma en que ha decidido ejercerlo y, en definitiva, por la grave y negativa huella que ya deja en la vida de nuestro país.

## **ERRORES: RAJOY Y SU GOBIERNO HAN HUNDIDO LA CONFIANZA EN ESPAÑA**

El Gobierno del PP, desde su mismo arranque, ha acumulado errores, contradicciones e indecisiones muy considerables que le han acompañado a lo largo de todo un año y el precio a pagar por todos ha sido el de la desconfianza generalizada en torno a su capacidad y a la propia solidez de nuestra economía.

### **El error de ejecutar una política económica que ha alimentado la espiral de crisis**

El PP se presentó a las Elecciones Generales con dos estrategias fundamentales: la reducción del déficit, como principal solución a nuestra crisis económica, y la inexplicada creencia en que la economía crecería únicamente con políticas de austeridad, sin variar el *status quo* existente (sin subida de impuestos, sin tocar servicios públicos esenciales, sin abaratar el despido).

Un año después, el gobierno de Mariano Rajoy sigue manteniendo que es posible alcanzar el crecimiento únicamente por la vía de la austeridad, sin que sea necesario llevar a cabo ningún estímulo económico, ninguna política contracíclica, aunque por el camino el *status quo* haya cambiado radicalmente en cuanto a los impuestos o a los servicios públicos y todas las magnitudes macroeconómicas registradas, todas las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales y todas las recomendaciones, se empeñen en mostrar lo contrario.

Hoy se puede afirmar que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles son más pobres y viven en peores condiciones que hace un año. Y al mismo tiempo, que la economía española, atendiendo a los principales indicadores macroeconómicos, está en una situación considerablemente más deteriorada, batiendo cada mes y cada trimestre records de malas noticias económicas:

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
PIB (tasa de crecimiento interanual)	0,0% (4º trimestre)	-1,6% (3er trimestre)
Tasa de paro	22,85% (4º trimestre)	25,02% (3er trimestre)
Paro registrado	4.422.359 (diciembre)	4.907.817 (noviembre)
Afiliación a la Seguridad Social	17.229.922 (diciembre)	16.531.048 (noviembre)
Número de hogares con todos sus miembros en paro	1.575.000 (4º trimestre)	1.737.900 (3er trimestre)
Número de hogares donde no hay perceptores de ingresos	578.400 (4º trimestre)	626.900 (3er trimestre)
IPC (tasa de crecimiento interanual)	2,4% (dato diciembre)	3,5% (octubre)
Nivel de deuda pública (% del PIB)	68,5% (4º trimestre)	75,9% (2º trimestre)

Estas certezas, aún a pesar de su dramática contundencia, no han cambiado el rumbo del Gobierno en cuanto a las políticas a adoptar. Muy al contrario, los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se han convertido en la última propuesta de recortes. Un Presupuesto cuya nota más característica es que la mayor partida presupuestaria, 38.600 millones de euros, se destina a pagar intereses de la deuda, una cifra mayor que la que se destinará a pagar las nóminas de todos los funcionarios y empleados públicos del Estado.

Como ya ocurrió con el objetivo de déficit para 2012, los Presupuestos para 2013 han demostrado una vez más que Rajoy y su gobierno van por un lado, y la Comisión Europea, el FMI, la OCDE y los servicios de estudios de diferentes instituciones privadas van por otro. Se trata de un presupuesto que se apoya en unas previsiones macroeconómicas carentes de toda credibilidad, y que apenas un mes después de hacerse públicas, han sido echadas por tierra por la propia Comisión Europea.

Mientras el Gobierno pronostica que en 2013 el PIB caerá tan sólo un 0,5%, y que la tasa de paro se situará en el 24,3%, la Comisión, en sus Previsiones Económicas de Otoño, establece para nuestro país una caída del PIB del 1,5% y una tasa de paro del 26,6% para 2013. Y con estos datos, sentencia que

España no cumplirá el déficit ni en 2012, ni en 2013, ni tampoco en 2014. Unas previsiones liquidadas.

Por su parte, las últimas previsiones lanzadas por el FMI y la OCDE ridiculizan igualmente los cálculos del Gobierno. Ambos organismos coinciden con la Comisión en que nuestro país no vislumbrará crecimiento económico positivo hasta 2014, así como que la tasa de paro se situará en 2013 por encima del 25%.

Tras un año de dureza y recortes para los ciudadanos, que ven mes tras mes como el Estado de Bienestar se desmantela ante sus ojos, la conclusión es que todo el sacrificio no se va a traducir en un horizonte de salida de la crisis a corto e incluso medio plazo.

El desempleo no ha dejado de crecer bajo este Gobierno, superando todos los records ya sea en términos de paro registrado, ya de EPA. Según esta última, al concluir el tercer trimestre había en España más de 5 millones de parados, 487.200 ocupados menos que a 1 de enero y 1.737.900 hogares con todos sus miembros en paro. Y, para mayor gravedad, entre enero y noviembre la afiliación a la Seguridad Social ha caído en 698.874 personas.

Un año después, nuestro país está sumido en una profunda recesión económica, nuestros bancos han tenido que ser rescatados, estamos al filo de un incierto rescate completo del que el Gobierno no alcanza a explicar ni el cuándo ni el cómo, hay más parados que nunca y el ejecutivo se muestra incapaz de negociar con las instancias europeas una solución para que a nuestra economía le cueste menos financiarse y vuelva a fluir el crédito.

Éste es el balance económico de un año del Gobierno de Rajoy, y la demostración del fracaso de una política económica que, en pocos meses y por la vía del Decreto Ley, puede acabar con el Estado de Bienestar.

## Imprudencias y torpezas

Junto al error estratégico de la política de ajustes a ultranza, el gobierno ha acumulado durante su primer año de legislatura todo tipo de torpezas y contradicciones que han contribuido a generar una desconfianza sin precedentes en su capacidad de gestión y afectando a la propia solidez de nuestra economía.

Comenzó mal la legislatura, cuando, por razones de interés electoral del PP en Andalucía y Asturias, se retrasó la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para ocultar los recortes que ya tenía en cartera. Que un Presidente del Gobierno anteponga los intereses electorales de su partido ante los de su país fue el primer síntoma de alarma y desconfianza en Europa sobre la capacidad del Gobierno para combatir la crisis.

La presentación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado aumentó la desconfianza tanto de la UE como de los mercados ya que las primeras cuentas anunciadas por Mariano Rajoy no cuadraban. Nadie, ni en España, ni en Bruselas, ni en los mercados creyó en sus previsiones.

Y el Gobierno del PP tampoco; en una decisión sin precedentes, tardó apenas unos días en presentar una enmienda a la totalidad a sus Presupuestos, recortando 10.000 millones de euros en sanidad y educación. La línea roja del Estado de Bienestar se traspasaba.

No fue la única; en el mes de julio, con el paro aumentando vertiginosamente y la prima de riesgo desbocada, poco después de aprobarse las cuentas en el Parlamento, de nuevo el Ejecutivo volvió a auto enmendarse, esta vez con un paquete de recortes que alcanzó los 65.000 millones de euros.

Por si no fuese suficiente, la gestión del Gobierno del rescate financiero ha sido todo un desastre desde el mismo día que se solicitó, con Rajoy patrocinando personalmente en el eufemismo de la “línea de crédito”, proclamando, en un ejercicio surrealista, que él era quien había presionado a la Unión Europea, y

negando además cualquier tipo de condicionalidad y aumento en la deuda pública o el déficit.

Poco a poco las consecuencias de aquel préstamo se sienten sobre nuestra economía. La aprobación de los planes de restructuración de las entidades saneadas tendrá consecuencias directas e inmediatas sobre los ahorradores (compradores de preferentes) y sobre los empleados de estas entidades y consecuencias indirectas, pero muy graves, sobre el equilibrio de las cuentas públicas (la deuda pública ya está en niveles máximos desde 1912 y seguirá subiendo por el rescate bancario).

En el centro de esta cadena de torpezas, y desencadenante de las mismas, se encuentra la pésima gestión del Gobierno en la crisis de Bankia que ha que nos precipitó al rescate financiero.

Los países de nuestro entorno y los mercados asistieron atónitos a que lo que el Gobierno español presentó como un problema de 4.500 millones de euros, pasara en pocos días a ser de 7.000 millones, luego de 10.000 millones... y, así, hasta llegar a los 23.500 millones, anticipados por cierto, antes que por el Gobierno, por el nuevo Presidente de la entidad nacionalizada.

Ya en términos generales, el rescate financiero supone que los españoles estamos invirtiendo miles de millones en unas entidades financieras que están en una situación económica muy delicada, además de avalar los residuos de la burbuja inmobiliaria agrupados en el banco malo. Pese a la importancia del asunto, no se ha debatido en el Parlamento el MOU (condiciones del rescate financiero), ni los objetivos, ni el plan de negocio del banco malo. El Gobierno está hurtando el necesario debate político en torno a un asunto vital para el futuro de nuestro país.

Además, los retrasos en la unión bancaria y la negativa alemana a permitir que el fondo de rescate europeo recapitalice directamente a la banca impiden romper el círculo vicioso entre la deuda soberana y la deuda bancaria. Se duda de la solvencia del país por la debilidad del sector financiero y se duda de la

solvencia de la banca por la cantidad de deuda pública española que tienen en sus balances (1/3 del total de la deuda del Tesoro está en manos de nuestros bancos).

Por eso, junto a la gestión de la crisis de Bankia, uno de los grandes fracasos del Gobierno en la crisis financiera ha sido no conseguir que se cumpla lo acordado en el Consejo Europeo de junio, en el que se pactó romper el vínculo de la deuda soberana con la deuda pública a través de la recapitalización directa a los bancos.

Finalmente, el rescate financiero, no ha sido un préstamo a los bancos en condiciones ventajosas sino un préstamo al Estado, para que a su vez se lo preste a los bancos, pero asumiendo el riesgo y el coste de la deuda todos los contribuyentes.

## RECORTE TRAS RECORTE: DESMONTANDO EL ESTADO DE BIENESTAR

En doce meses se han llegado a realizar **cinco grandes oleadas de recortes** que concretan la política de austeridad y nada más que austeridad del Gobierno.

Con ellos, se abre paso a la regresión más grave que nunca antes haya conocido el Estado de Bienestar tal y como fue concebido y desarrollado durante las décadas de los 80 y 90.

El cambio radical en la esencia del modelo en sanidad, al pasar de un sistema de derechos a uno de aseguramiento, con la exclusión de determinados colectivos, la introducción del copago para medicamentos y prestaciones, ha creado nuevas desigualdades y nuevos desequilibrios territoriales permitiendo que la cohesión del sistema se resquebraje. Mientras, el descenso de gastos en educación o investigación, junto al aumento de alumnos por aula o a la disminución de las becas y su cuantía, tendrá consecuencias muy negativas sobre la formación y la preparación de las futuras generaciones; supondrá una limitación muy importante para la capacidad de crecimiento y modernización de la economía española. En política educativa o sanitaria, el año 2012 dejará huellas imborrables.

La liquidación de la ley de dependencia o la disminución drástica del gasto en servicios sociales básicos, están contribuyendo a agravar el riesgo de exclusión social en nuestro país, que cada día es mayor, cuando son los servicios sociales públicos los que han de garantizar, por derecho, el apoyo a las personas que lo necesitan y redoblar los esfuerzos en situaciones críticas, como las que se están atravesando de pobreza, que las instituciones públicas no podrán atender, y que tendrán que acudir a la solidaridad privada o a la caridad de instituciones sociales. La pobreza es ya un problema del que el gobierno tiene que hacerse cargo de forma inmediata.

## El primer recorte. RDL de 30 de diciembre de 2011

La reducción del gasto se cifró en 8.900 millones de euros:

- Reducción del 20% del presupuesto de RTVE y RENFE.
- Reducción de I+D+i en 200 millones.
- Reducción de 20% en subvenciones a partidos políticos.
- Reducción de 400 millones en préstamos a concesionarios de autopistas.
- Suspensión de Ley de Dependencia para los dependientes moderados, liquidación de la renta de Emancipación, reducción de las ayudas al desarrollo y otras.

En el incremento de ingresos, con una estimación de 6.275 millones de euros:

- Actuaciones sobre el IRPF: establecimiento de un gravamen complementario y temporal y progresivo (con un impacto de 5.357 millones de euros).
- IBI: incremento del tipo impositivo (con un impacto calculado en 918 millones de euros).

## El segundo recorte. Los PGE de 2012

Con un ajuste total de 27.000 millones de euros (la administración Central asume 17.800) para cumplir el objetivo del déficit en aquel momento del 5'3%.

A destacar:

- Descenso de 2 puntos del gasto social.
- Recorte de 1.557 millones en las políticas activas de empleo, de 1400 en cooperación al desarrollo de 1.961 en infraestructuras.
- Recorte de 1.943 millones en I+D+I civil. Si recurrimos al conjunto, el recorte es de 2.196.
- Se redujeron las ayudas para la vivienda en 322 millones.
- Por los ingresos, con varias medidas (en impuesto de Sociedades etc.) que preveían un incremento de la recaudación de 12.314 millones de euros.
- Eliminación del nivel acordado de la Ley de Dependencia, que ascendía a 283 millones de euros, lo que implica un recorte total de 566 millones de

euros si sumamos las aportaciones que las Comunidades Autónomas debían realizar.

Los Presupuestos incluyeron una **amnistía fiscal** para recaudar 2.500 millones de euros con gravámenes del 8% y del 10% si los dividendos y rentas se hacían aflorar antes del 30 de noviembre de 2012. Las condiciones posteriormente serían suavizadas siempre en la dirección de favorecer al defraudador. Amnistía que se ha convertido en un sonoro fracaso en tanto la recaudación no ha alcanzado ni el 50% de las previsiones del Gobierno.

Es decir, el Gobierno optó, al tiempo, por exigir impositivamente más a la mayoría de ciudadanos – incluidos los más débiles- y por amnistiar a los defraudadores. Se trata de una franca discriminación que, en un momento de crisis económica, tiene un efecto devastador en términos morales. Cuando se pide mayores sacrificios – bien por la vía de los recortes en el gasto, bien en cuanto a los ingresos – a la ciudadanía, a unos miles se les prima por haber defraudado.

### **El tercer recorte. 10.000 millones menos para Educación y Sanidad**

Tan sólo diez días después de la aprobación por el Consejo de Ministros de los Presupuestos, a través de una nota de prensa, el Gobierno anunció un ahorro adicional que superaría los 10.000 millones de euros afectando especialmente a sanidad y educación (7.000 al primero): introducción de copago farmacéutico para pensionistas, incremento de un 25% del copago para activos y parados, exclusión de la sanidad pública para inmigrantes sin papeles. Además, se ha abierto la puerta a la política agresiva del PP en materia de financiación de la sanidad pública como lo ha puesto de relieve la privatización de servicios hospitalarios decidida por la Comunidad de Madrid al tiempo que implantaba el pago de 1 euro por receta. De este modo, un pensionista madrileño puede llegar a abonar en torno a 20 euros mensuales (copago de 8 euros más pago por receta) por lo que hace un año no pagaba nada, cuidar de su salud.

## **El cuarto recorte. 65.000 millones menos en los Presupuestos de 2012 a 2014**

A penas aprobados los Presupuestos, el Gobierno desautoriza, por segunda vez, sus propias cuentas con el mayor ajuste fiscal de la historia de España ( 1'5% del PIB para 2012 y 2'5% para 2013 y 2014).

En suma, reducción de la prestación por desempleo (-17% la prestación), incremento del IVA (del 18% al 21% en el tipo general y del 8% al 10% en el reducido) y reducción de las cotizaciones para parados de más de 55 años, supresión de la segunda paga extraordinaria para los funcionarios, reducción del 15% de las prestaciones de dependencia que afectará a 435.000 personas dependientes y suspensión del convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, supresión de la deducción por adquisición de vivienda, incremento de las retenciones de los autónomos del 15% al 21%, acuerdo de no disponibilidad en Presupuestos de 600 millones de euros y otras medidas adicionales de recortes.

Se trata de un ajuste que concentra el 70% de su volumen en el aumento de los ingresos (39.000 millones) y que sin duda tiene consecuencias muy negativas sobre el crecimiento; se calcula que reducirá el 0'75% la tasa de crecimiento del PIB en el 2013.

## **El quinto recorte. Los PGE del 2013: más de lo mismo**

Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 ahondan en la estrategia del ajuste, persistiendo además en la orientación de un modelo de economía basado en los servicios y en un sistema productivo de baja cualificación.

Los Presupuestos nuevamente no contienen medidas para incentivar la actividad económica; más bien al contrario, establecen un recorte del gasto ministerial de prácticamente el 9%, lo que sumado a todo el conjunto de decisiones anteriores (subida del IVA en vigor desde el mes de septiembre, fin de desgravación por vivienda para todas las rentas, reducción de la prestación

por desempleo desde el 6º mes, copago sanitario, subida de tasas universitarias, etc.) sumergen a la población en una espiral de austeridad, recortes, recesión, aumento del gasto en prestaciones, incumplimiento del déficit y de nuevo austeridad difícil de parar.

Al tiempo, se abandona cualquier posibilidad de un cambio de modelo productivo ya que siguen cayendo las inversiones en los sectores que hacían esto posible. Educación, I+D+i y Universidad; es decir, todo lo que tiene que ver con la sociedad del conocimiento y su transferencia a la sociedad se debilita o desaparece.

Es ostensible **el abandono de la I+D+i como elemento de impulso de un nuevo modelo económico sostenible y competitivo** (con una reducción acumulada en este tiempo es del 26,6%, en total 2.016,60 millones de euros); España ha retrocedido una década y se sitúa presupuestariamente en niveles del año 2002 en cuanto a fondos destinados a I+D+i, pasando de representar el 2'3% en las cuentas del último Gobierno socialista a 1,55% tan sólo un año más tarde. En consecuencia se han visto reducidos el número de proyectos de investigación y por extensión de investigadores, generando la huida al extranjero de talento altamente cualificado.

Estos Presupuestos también han consolidado un descenso de las inversiones de Fomento del 36,7% desde el 1 de enero, que ha hecho caer ya en los primeros 8 meses del año 2012 la licitación de obra pública en un 56% con lo que supone tanto en términos de estímulo para la actividad económica como de empleo (se calcula que entre 2011 y 2013 perderemos 167.000 empleos a causa de la desinversión del Estado en Fomento). Con el último Presupuesto, el Gobierno se vuelve a desmentir a sí mismo y su Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda que preveía una inversión para los próximos 12 años imposible de acometer con el ritmo inversor actual.

Finalmente, es muy expresivo de las preocupaciones de Gobierno que los Presupuestos no reserven un euro para un Plan de Empleo dirigido a los más jóvenes, cuando este sector sufre un desempleo superior al 50%

Nos hallamos ante la sucesión ilimitada de recortes que plasman un ajuste muy duro de nuestra economía, apostando incondicionalmente por una política económica restrictiva en el momento en que el triunfo electoral de Hollande en Francia y cada vez más voces políticas y económicas resaltan la incapacidad de esta estrategia económica para generar crecimiento y poner fin a la crisis. Si el año 2012 es el de la puesta en cuestión en cada vez más ámbitos - respaldada por la evidencia de sus pobres resultados - de la política del ajuste por el ajuste, lamentablemente también lo es el del alineamiento sin condiciones del Gobierno de España a esa misma política de recortes.

Una política que afecta gravemente a la cohesión social, castigando a los débiles, a los trabajadores, a los desempleados, a los dependientes, a los enfermos, a los empleados públicos, a los autónomos y que tampoco ha excluido a los pensionistas cuyo incremento del 1% se ha visto desbordado por las acusadas alzas impositivas y la introducción del copago farmacéutico.

Una política injusta, porque castiga a los más débiles, y equivocada, porque solo ha logrado deteriorar todos los indicadores, cuyos resultados están a la vista.

## LO CONTRARIO DE LO QUE PROMETIERON

La mayor parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy en estos meses no estaban anunciadas en el programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Incluso, es evidente que otra buena parte de las decisiones adoptadas en este año son radicalmente contrarias a los compromisos electorales con los que se presentó a las elecciones.

Las promesas con las que el PP ganó las elecciones por mayoría absoluta se han hecho añicos en estos meses por las subidas de impuestos, la bajada drástica del gasto en sanidad o educación, el recorte de derechos de los trabajadores, el abaratamiento del despido, la no revalorización de las pensiones, el desmantelamiento del sistema de dependencia, la congelación del Salario Mínimo Interprofesional, el incremento de las tasas universitarias o la reducción del gasto en investigación. El programa electoral del PP, por tanto, fue un enorme engaño.

El Gobierno también se ha ganado la desconfianza en la medida en que en más de una ocasión ha afirmado que no hará algo que, sin embargo, lo acaba por hacer a los pocos días. La petición del rescate financiero o la subida del IVA y recientemente la no actualización de las pensiones conforme al IPC son un buen ejemplo de ello.

Lo que sigue, son tan sólo algunas muestras de esta nada común capacidad para gobernar a espaldas por completo del programa con el que se concurrió a las elecciones, y, por tanto, de los compromisos adquiridos con los ciudadanos:

## Subida de impuestos

### Antes

Rajoy, 14 de marzo de 2010: “La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a sus compatriotas”.

### Después

- Subida del IRPF y el IBI  
En el paquete de medidas económicas aprobadas en el primer Consejo de Ministros, diciembre de 2011, se incorporó la subida del IRPF en todos sus tramos y el IBI. Con ello se castiga especialmente a las rentas medias y las rentas del trabajo.
- Subida del IVA  
Comenzaron negando rotundamente su subida por las consecuencias negativas que tendría para el consumo; terminaron estableciendo la subida del tipo general al 21% y del tipo reducido al 10% para el 1 de septiembre de 2012.

## Recortes

### Antes

Rajoy, 4 de noviembre de 2011: “Le meteré la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas, la sanidad y la educación. Ahí hay que respetar los derechos de los ciudadanos”.

### Después

- Se ha suspendido la revalorización de las pensiones
- Se ha congelado el Salario Mínimo Interprofesional
- Se ha recortado la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes
- Se ha cambiado radicalmente la esencia del modelo de sanidad, que ya no es universal, está dejando de ser gratuita y cada vez es menos pública.

- Se ha impuesto que los pensionistas paguen por sus medicamentos.
- Se han recortado las prestaciones y la protección a los parados
- Se ha ejecutado el mayor recorte presupuestario en educación de toda la democracia

## **Pensiones: no se actualizan**

### **Antes**

Rajoy, 10 de septiembre de 2012: “Si hay algo que no tocaré serán las pensiones porque el pensionista es la persona más indefensa, es el que lo tiene más difícil”

### **Después**

La decisión de no actualizar las pensiones para compensar el desfase del IPC ha constituido el último cuadro de un engaño continuado al que el Gobierno ha sometido a más de 8 millones de pensionistas con cuya incertidumbre se ha jugado pese a las preguntas formuladas por el Partido Socialista en sede parlamentaria y también a que el Gobierno aprobó los Presupuestos de 2012 afirmando que cumpliría la Ley con la revalorización.

Con esta medida, el Gobierno de Rajoy completa el itinerario de recortes en todos y cada uno de los elementos esenciales del Estado de Bienestar; todos los colectivos, desde los pacientes de la sanidad pública, los alumnos de la escuela pública y sus familias, las personas con discapacidad y los restantes beneficiarios de la protección por dependencia... y ahora los mayores, han sido alcanzados por una política indiscriminada de ajustes que han hecho recaer sobre ellos una distribución arbitraria e ineficaz de las medidas de austeridad.

Los jubilados no sufrirán tan sólo en el 2012 la pérdida del poder adquisitivo (1'9%) como resultado de no compensar el incremento de precios, sino que deberán asumir que la subida para el año 2013 se realiza sin contar con dicha desviación, es decir partiendo de lo que han perdido el año anterior. El cálculo

es que un pensionista sufrirá una pérdida superior a los 400 euros por esta decisión del Gobierno.

Se ha consumado, por tanto, un engaño deliberado a los pensionistas partiendo de un escenario de recuperación del poder adquisitivo de las pensiones cuando el Gobierno en el año 2011 si las actualizó un 1'3% con una paga compensatoria.

Para mayor gravedad, se ha modificado la norma que regula el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de manera que hasta 2014 se eleva el límite de disposición del Fondo por parte del Gobierno, eliminando así su carácter de "intocable". En muy poco tiempo, el Gobierno del PP reducirá sustancialmente dicho Fondo, siendo un elemento de preocupación añadida para el futuro de las pensiones de quienes se encuentran en edad de trabajar.

## **Ataque a los funcionarios**

### **Antes**

Programa Electoral del PP: "Reconoceremos la función de los empleados públicos como piezas fundamentales de una administración moderna y de un servicio público eficaz". El 5 de marzo de 2012, Rajoy afirmó que no tenía "ningún proyecto de reducir los sueldos de los funcionarios".

### **Después**

- Supresión de la paga extraordinaria de Navidad para los empleados públicos de todas las Administraciones. Este recorte significa una rebaja del salario bruto anual de los funcionarios entre el 5% y el 7% (quince días después de establecer la congelación de salarios para los Presupuestos Generales de 2012).
- Reducción de los días de libre disposición de los funcionarios. En concreto, pierden 3 de los 6 "moscosos", así como los días libres que acumulaban conforme sumaban antigüedad, los llamados "canosos". En resumen, los empleados públicos de los 6 actuales se quedarán con 3 días de libre disposición al año.

- Se reduce el número de funcionarios y se evitará que cuando estén de baja cobren el 100% del sueldo.
- Con la Reforma Laboral y su posterior desarrollo reglamentario, se abre la puerta al despido masivo de empleados en las Administraciones Públicas.
- Se han anunciado ERES en empresas de la importancia de AENA, RENFE, IBERIA etc.

## Malestar social

### Antes

Mariano Rajoy, 19 de diciembre de 2011 (discurso de investidura): “No existe mejor instrumento para encauzar y coordinar la energía de la Nación que el diálogo. Un diálogo abierto a todos, dentro y fuera de esta Cámara. Un diálogo basado en la transparencia, que estimule la unidad, fortalezca los objetivos compartidos y facilite el apoyo y la participación de todos los ciudadanos y de sus organizaciones. Esta quiero que sea, y necesito que sea, la principal característica del estilo del nuevo gobierno”.

### Después

En lugar de “estimular la unidad”, la gestión del Gobierno de Rajoy ha provocado tal nivel de desesperanza y de indignación que, en este año, el Ejecutivo ha sido objeto de dos huelgas generales (29 de marzo y 14 de noviembre). Y hasta primeros de octubre pasado, se habían producido más de 2.700 concentraciones y manifestaciones sólo en Madrid. En todo 2011, fueron 1.380.

El dialogo brilla por su ausencia como lo prueba que en los dos Presupuestos aprobados, el PP no haya recibido prácticamente otros apoyos y que en la mayoría de los proyectos legislativos ha mostrado una casi nula capacidad para sumar algún respaldo parlamentario a sus iniciativas. Y en el terreno de la sociedad civil, el dialogo del Gobierno con los sectores sociales está bajo mínimos allí donde se quiera buscar.

La reforma de la sanidad se ha hecho de espaldas a los profesionales sanitarios, sin diálogo, rompiendo el consenso que ha perdurado más de 25 años sobre nuestro Sistema Nacional de Salud.

## Calidad democrática

### Antes

Programa Electoral del PP: “Recuperaremos el sentido constitucional del decreto-ley”.

### Después

La gravedad de la situación económica y la urgencia de tomar decisiones no impidió a Rajoy retrasar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2012 para después de las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias sólo para favorecer sus intereses políticos. Sin embargo, el Gobierno se ha escudado en la excepcionalidad de la situación económica para imponer con urgencia sus ajustes y recortes a base de decreto. En lo que va de Legislatura, el Gobierno ha enviado al Parlamento 29 decretos-leyes, frente a 21 Proyectos de Ley.

Desde la aprobación de la Constitución nunca un Gobierno había legislado tan a golpe de Decreto Ley como lo ha hecho el de Rajoy lo que pone de manifiesto que la urgencia se ha convertido en un lugar común para hurtar el necesario debate parlamentario del que rehúyen sistemáticamente Rajoy y sus ministros.

En suma, y en sentido diametralmente opuesto a su compromiso electoral, el Gobierno de Rajoy ha superado con creces los límites establecidos por la Constitución en materia de legislación de urgencia.

El Tribunal Constitucional señala que la apreciación de “extraordinaria y urgente necesidad” corresponde inicialmente al Gobierno y su evaluación posterior al Congreso, en el trámite de convalidación. Pero este presupuesto habilitante del

recurso a la legislación de urgencia no es posible encontrarlo en los Decretos - ley aprobados este año como el de la modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, el de medidas urgentes en materia de medio ambiente o los promulgados para trasponer directivas comunitarias.

Y en todo caso, es clara la prohibición que figura en la Constitución de que afecten a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en su Título I, como ha sucedido al aprobar una amnistía fiscal que afecta al deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, utilizando un Decreto-ley.

## **Altos cargos**

### **Antes**

Rajoy. Convención del PP. 21 de enero de 2011. Aboga por reducir a la mitad “como mínimo” el número de altos cargos políticos.

### **Después**

Para 2013, según los Presupuestos Generales del Estado, la cifra de Altos Cargos se elevará hasta los 455. Por otra parte, Rajoy en los primeros Presupuestos que aprobó, los de 2012, elevó el capítulo de sus asesores pasando de 56 a los 82 con los que actualmente cuenta.

Asimismo, la reforma de las Administraciones Públicas, comprometida en el Programa Electoral del PP y anunciada en varias ocasiones por la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría en distintas comparecencias tras el Consejo de Ministros, se ha quedado de momento en la creación de una comisión de trabajo que, después de hacer una auditoría completa de todas las estructuras administrativas, presentará sus propuestas de reforma.

## **Opacidad**

### **Antes**

Programa Electoral del PP: “Propondremos una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que establezca los deberes de las

administraciones en esta materia y garantice a los ciudadanos la efectividad de este derecho de acceso”.

## **Después**

Efectivamente, el proyecto de esta ley ya está en tramitación parlamentaria aunque su proceso de elaboración ha sido opaco y el texto elaborado está plagado de límites y restricciones. Las críticas que ha recibido el proyecto de ley de transparencia por parte de los expertos y los grupos organizados que lo vienen demandando, coinciden en señalar que no recoge buena parte de las sugerencias aportadas, al tiempo que fija restricciones excesivas al tipo de información pública que podrá darse a conocer con esta ley.

Se observa, incluso, que no se garantiza el cumplimiento de la propia ley, ya que no se contempla un efectivo sistema de control, de infracciones y sanciones, y de garantía en el ámbito de transparencia de la actividad pública.

La escasa vocación del Gobierno por la transparencia no ha tardado en quedar probada al dificultar incluso al propio Congreso de los Diputados el acceso a las aportaciones ciudadanas a la Ley que el Grupo Socialista ha pedido conocer antes de presentar sus enmiendas al texto.

## EXTREMADAMENTE CONSERVADORES

Si bien es cierto que la desastrosa gestión económica ha restado visibilidad a otras políticas del Gobierno de Rajoy y se observa una marcada parálisis en la capacidad de realización de otras áreas de la acción de gobierno, allí donde ha establecido sus prioridades el Ejecutivo del PP ha mantenido una posición extremadamente conservadora y regresiva ya sea en el ámbito laboral, el de la educación, de la sanidad el de los medios públicos de comunicación, el de la protección del medio ambiente o en relación a leyes tan esenciales desde el punto de vista de los derechos como la de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

### Reforma Laboral

Lo que el Gobierno llamó una Reforma Laboral, ha sido una regresión en toda regla, una contrarreforma histórica del mercado de trabajo:

- Una contrarreforma porque hizo del despido la opción más fácil para que una empresa mejore su competitividad. Generalizó el abaratamiento del despido a 20 días.
- Una contrarreforma porque supuso un retroceso de los derechos de los trabajadores. Abrió la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de acuerdo.
- Una contrarreforma porque abrió el camino de los despidos colectivos en el sector público, no solo incumbiendo a quienes trabajan en las empresas públicas, sino también al personal laboral contratado directamente por los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas o los propios Ministerios.
- Una contrarreforma porque anuló sustantivamente la capacidad de negociación de los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores.
- Una contrarreforma porque ha puesto en riesgo la conciliación de la vida laboral y familiar: dificultó el contrato a tiempo parcial siendo la reducción

de jornada la opción más utilizada para la conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres principalmente.

Los resultados de la Reforma Laboral están siendo ya extraordinariamente negativos para el mercado de trabajo cuyo deterioro es visible como lo demuestra que, desde su entrada en vigor y hasta octubre, pese a mediar los meses en los que es más acusada la contratación de temporada, el número de parados se haya elevado prácticamente en 200.000 personas y que estemos asistiendo a un fenómeno especialmente preocupante como es el descenso de la población activa.

## **Desahucios**

El número de desahucios como consecuencia de la pérdida de renta de muchas familias españolas que padecen el desempleo, se ha convertido en un grave problema social que ha experimentado un dramático crecimiento en los últimos meses.

Esta situación se explica porque la legislación actual sobre la ejecución hipotecaria se encuentra desequilibrada a favor del acreedor; es decir, la responsabilidad recae en el deudor que se sitúa en una posición de práctica indefensión frente a la entidad que le ha concedido el crédito.

Ante el agravamiento de la situación económica y el incremento de los desahucios, el PSOE presentó una Propuesta de Ley de Segunda Oportunidad que apuesta por una reforma de calado de la legislación hipotecaria para evitar que los cambios en la situación personal no supongan para el deudor la imposibilidad de reestructurar su deuda y abran soluciones a los problemas que surgen como resultado de la pérdida sobrevenida de su renta.

La presión social, las demandas de jueces y magistrados y la oposición parlamentaria, forzaron al Gobierno de Rajoy a iniciar un diálogo con el PSOE para atajar el problema de los desahucios que finalmente concluyó con la

decisión del PP de adoptar medidas claramente insuficientes que no resuelven el problema fundamental de la posición de privilegio de las entidades financieras en la relación hipotecaria. Así pues, el Gobierno ha perdido una oportunidad que le concedía la responsabilidad del primer partido de la oposición para encontrar una vía de solución a un grave problema social y ha optado por una falsa salida que ya está poniendo de manifiesto sus graves limitaciones con la consiguiente frustración para miles de familias afectadas

### **Recortes en el Sistema Público de Salud**

La sanidad pública española ha sufrido en el último año una ofensiva sin precedentes; a las decisiones del Gobierno de la Nación, tomadas sin ningún tipo de diálogo o consenso con los profesionales o grupos políticos, se han unido las adoptadas unilateralmente por algunas de las Comunidades Autónomas gobernadas (euro por receta, pago del transporte sanitario) por el PP y CiU que han castigado a los sectores de población con más necesidades sanitarias y menos recursos, los enfermos crónicos y los pacientes de enfermedades raras. Además, el rumbo de las privatizaciones en algunas de ellas ya ha tomado velocidad de crucero cuando la salud de las personas debe ser tratada como un servicio público y no como mero objeto de consumo más.

El Gobierno de Rajoy comenzó aprobando un Real Decreto que cambió el modelo sanitario y lo sustituyó por uno de aseguramiento; la sanidad española ya no es universal y ha expulsado de su cobertura a determinados colectivos como los inmigrantes en situación irregular.

Y ha abierto una senda de más recortes y encarecimiento de la sanidad pública española de la que da cuenta el establecimiento del copago a pensionistas e incremento al resto de la población, exclusión de medicamentos de la cobertura sanitaria, negativa a las subastas de fármacos, copagos en algunos servicios como los productos dietéticos, las prótesis y el transporte sanitario, entre otras prestaciones sanitarias aún sin definir. Un conjunto de actuaciones que debilitan la cohesión del Sistema Nacional de Salud creando nuevas desigualdades y nuevos desequilibrios territoriales y que han ido acompañadas

de concesiones administrativas a la sanidad privada. Ciertamente estas medidas no han servido para el ahorro que decía buscar el Gobierno; en los primeros seis meses del año, la sanidad pública española adeuda más de 6000 millones de pagos a proveedores.

Todos estos asuntos ofrecen un panorama en el que el Ministerio de Sanidad es incapaz de ejercer el liderazgo para asegurar la sostenibilidad, la calidad, la cohesión y la igualdad sanitaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Al revés, la sanidad española, hoy, se parece más a un monstruo de 17 cabezas que a un sistema común, universal, cohesionado, basado en la equidad.

Esta realidad, la evidencia de que nos hallamos ante una ofensiva del Gobierno del PP que atenta contra los elementos nucleares del sistema sanitario público, ha provocado una movilización sin precedentes y sin excepciones en el sector cuyos profesionales están viviendo de manera muy directa como la derecha atenta contra un logro que se había convertido en un patrimonio de la sociedad española.

### **Educación y Universidad: regresión, descenso en la calidad y menos recursos**

En un contexto de grave crisis económica en el que la educación y la investigación se deben de convertir en uno de los principales mecanismos de lucha contra la desigualdad de oportunidades y el desempleo, el Gobierno del Partido Popular ha seguido una política de ausencia de acuerdos y desprecio hacia la comunidad educativa, intentando desprestigiar a los estudiantes, padres y madres y con el objetivo de imponer un modelo que ya es claramente regresivo:

- El Ministro no ha dudado en culpabilizar al sistema educativo público y a la inversión, que durante más de 30 años han realizado los diferentes gobiernos, de que exista en España más de un 50% del paro juvenil.

- Ha faltado al respeto de quienes se dedican a la carrera docente con insinuaciones absolutamente infundadas.
- El Gobierno del PP ha recibido por primera vez en la historia el plantón del conjunto de Rectores de la totalidad de las Universidades Españolas.
- Ha sufrido la primera huelga en todo el sistema educativo de la historia de España.
- Ha visto como padres y madres se unían por primera vez a los alumnos que organizaban una huelga contra los recortes impuestos por el Gobierno al sistema educativo público.

De igual modo, los recortes del Gobierno deterioran un sistema educativo y universitario que ha costado mucho tiempo equiparar con los países de nuestro entorno:

- En tan solo 10 meses en el Gobierno, el PP ha recortado 5.212 millones en Educación. Un 21% menos en 2012 y un 14,4% menos para 2013.
- Los recortes han hecho desaparecer el programa de educación infantil de 0 a 3 años (EDUCA3), el de Campus de Excelencia Internacional o el Escuela 2.0 que lleva las Tics a las aulas en la enseñanza en la Etapa Primaria y están suponiendo la merma creciente de servicios educativos: descenso en las ayudas para libros, material escolar, ayudas para comedor y el deterioro de la red de escuelas rurales. Especialmente graves son medidas adicionales como la de eliminar la obligatoriedad de que los centros oferten al menos dos modalidades de Bachillerato.
- Las familias han sufrido en el inicio de curso la subida del IVA que afecta al material escolar.
- Al tiempo, el RD de abril ha provocado el despido de miles de profesores interinos en toda España, al aumentar las ratios un 20% de alumnos por aula pasando de 25 a 30 en Primaria y de 30 a 35 en Secundaria y aumentar el número de horas lectivas.
- Se ha promovido una combinación desastrosa para la igualdad de oportunidades: la mayor subida de tasas universitarias de la historia, la bajada del presupuesto para becas universitarias y el endurecimiento de los

criterios académicos para obtener y conservar una beca. El resultado es un descenso en las matriculaciones como ya han constatado la mayor parte de las universidades, una disminución que puede llegar a 300.000 becarios menos y una situación financiera límite para las universidades públicas. Especialmente grave es el golpe para las becas Erasmus que ha pasado de un presupuesto de 65 Millones de euros en 2011 a escasos 15 millones en 2013.

- No se ha dudado en liquidar una asignatura de Educación para la Ciudadanía, suprimiendo el respeto a los modelos familiares, la propia orientación sexual o algo tan evidente como la eliminación del estudio crítico de las causas de la pobreza o al antisemitismo como forma de intolerancia.

El colofón a esta senda es la presentación de una nueva legislación educativa (LOMCE) que supone una franca regresión a la educación de hace décadas; un modelo con itinerarios que segregan a los alumnos desde edades tempranas y nos aleja de los modelos de mayor éxito y calidad de Europa.

Se ha presentado una ley excluyente que, con el discurso de la libertad de elección, regresa a un sistema que potencia y protege a las élites. También se recuperan las reválidas lo que supone avanzar hacia un sistema de selección continua del alumnado que ha demostrado su ineficacia y que nos aleja de los modelos educativos que han ofrecido mejores resultados. Al tiempo, se admite la financiación pública a centros que segreguen por sexo, se refuerza la educación concertada y se introduce la financiación con fondos públicos a aquellas familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial; y finalmente, se atiende a una reivindicación histórica de la Conferencia Episcopal al introducir una asignatura alternativa a Religión tanto en primaria como en secundaria.

## Desmantelamiento del Sistema de Dependencia

Desde que el Partido Popular llegó a La Moncloa, hace ahora un año, la Ley de Dependencia, impulsada por el Gobierno socialista, ha sido cuestionada y atacada en sus principios inspiradores. En tan sólo doce meses, el Gobierno ha puesto en marcha un proceso de desmantelamiento del Sistema, modificando la Ley por la puerta de atrás, sin dar margen al diálogo:

En el primer Consejo de Ministros, a través de un Real Decreto Ley, paralizaron la aplicación del calendario de implantación de la Ley, impidiendo a casi 400.000 personas con dependencia moderada acceder a sus prestaciones. Y en los PGE 2012 eliminaron el nivel acordado que ascendía a 283 millones, lo que implica un recorte total de 566 millones de euros, si se suman las aportaciones de las Comunidades Autónomas.

Posteriormente, con un nuevo Real Decreto Ley se suprimieron los niveles, dejando simplemente los grados establecidos, lo que ha supuesto la revisión de la valoración de muchas personas en situación de dependencia y, como consecuencia, que algunas vean rebajado el grado que tenían reconocido (y por consiguiente, los servicios y prestaciones a los que tenían derecho) y otras sean expulsadas del sistema. Asimismo, ampliaron a 2 años el plazo para resolver las ayudas sin que tuviera efecto retroactivo y, como consecuencia, teniendo en cuenta de que 54% de los dependientes son mayores de 80 años, hay personas que van a morir sin resolución. Además, han eliminado las compatibilidades de servicios.

Por otro lado, han reducido el 15% la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, con 435.000 personas perjudicadas por ello y han suspendido la regulación del convenio especial en el sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que dejó de financiar el Estado y ahora tienen que pagar los propios cuidadores, lo que afecta a 180.000 personas, el 94% mujeres, muchas de las cuales, al asumir el pago de la Seguridad Social se quedan con apenas 100 euros al mes. Igualmente, han reducido en un 13% la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección 200 millones de euros menos. A estas medidas, se

suman los recortes adicionales de muchas CCAA, así como el aumento del copago para las personas dependientes.

Las consecuencias de este dismantelamiento son, hoy, ya muy evidentes y dramáticas. Por primera vez, en el conjunto del sistema hay menos personas dependientes atendidas, personas que tenían derecho a recibir una prestación o servicio y ahora ya no lo tienen. En agosto, justo después de que se aprobara el Real Decreto-ley 20/2012 con los recortes en Dependencia, 780.536 personas recibían un servicio o prestación del Sistema de Dependencia. En noviembre, son sólo 773.257. Es decir, en tres meses, hay cerca de 7.300 personas dependientes menos atendidas.

Con su política de recortes y más recortes, el Gobierno de Rajoy no sólo ha renunciado a garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos básicos, sino que está provocando un grave deterioro de los mismos, con efectos directos en los ciudadanos.

El Gobierno del Partido Popular ha metido la tijera en la Dependencia hasta reducir los fondos en más de un 30% lo que supone un ataque en toda regla a su sostenibilidad económica y, finalmente, el dismantelamiento y colapso del propio sistema de dependencia, como así lo demuestran los datos. Son las decisiones del Partido Popular las que acaban provocando, de manera perversa, que el sistema de dependencia sea ineficaz, ineficiente e inviable.

Otra consecuencia negativa de los recortes impulsados por el Gobierno de Rajoy es la destrucción de empleo. Esto ya se evidenció en el año 2011, coincidiendo con la llegada del PP a los Gobiernos autonómicos responsables de la aplicación de la Ley, como Castilla la Mancha, Aragón o Baleares, que pasaron de crear empleo, en el primer semestre de 2011, a destruirlo en el segundo semestre.

Ahora, la expulsión del sistema de casi 7.300 personas atendidas puede suponer el despido de unos 700 trabajadores más. Y todo ello a pesar de que, en este tiempo desde que entró en vigor la Ley de Dependencia, se habían

creado más de 185.000 nuevos empleos directos y 63.000 nuevos empleos indirectos, en un contexto de grave crisis económica caracterizado por la destrucción de empleo.

### **Dificultades en la cooperación con las Comunidades Autónomas**

El Gobierno se ha negado a trasladar a las Comunidades Autónomas una parte de la flexibilidad en los objetivos del déficit que ha concedido la Unión Europea a nuestro país pese a haber sido reclamado por los Gobiernos de Andalucía y Asturias.

Según el acuerdo adoptado por la reunión de Ministros de Economía de la UE, el Plan de Estabilidad se flexibilizará hasta el 4,5% en el 2013 y no será hasta 2014 cuando se cumpla que la diferencia entre ingresos y gastos del Estado no supere el 3%. Sin embargo el Gobierno de Rajoy ha realizado una distribución desigual del esfuerzo, mientras que el Estado tiene que realizar un ajuste cifrado en 24.500 millones de euros, impone a las CCAA un 40% más de ajuste, obligándoles a recortar 34.300 millones.

De este modo mientras el Estado se ha beneficiado de la decisión de la UE de aplazar en un año el objetivo de déficit para España, pudiendo disponer de 45.700 millones más, las CCAA pierden 12.200 millones.

Teniendo en cuenta que son los gobiernos autonómicos los principales prestadores de los servicios esenciales del Estado del Bienestar (sanidad, educación y políticas sociales entre otros) este desigual reparto del esfuerzo en el ajuste ha puesto en riesgo la prestación de estos servicios y ha abierto la puerta a la pérdida de la universalidad, la gratuidad o incluso al desmantelamiento de los mismos por parte de gobiernos autonómicos del PP.

Así mismo el Gobierno de Rajoy no ha dudado en dificultar que las CCAA desarrollen una política de mantenimiento de los servicios propios del Estado del Bienestar universales y gratuitos con iniciativas que como la “subasta de medicamentos” del Gobierno andaluz, permite un gasto más eficiente que

evitaría tener que adoptar recortes más agresivos y que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional.

También en esta política, el Gobierno del PP ha ido todavía más lejos y para ello no ha dudado en oponerse a la posibilidad que tienen las Comunidades para crear impuestos propios. Ante la iniciativa adoptada en su momento por la Junta de Extremadura, y también por los Gobiernos de Andalucía y Canarias y validada por el Tribunal Constitucional, de establecer un impuesto sobre la banca, ha llegado a inventarse un tributo con un tipo de gravamen cero, es decir un tributo falso, con el cual forzar a estas CCAA a tener que suprimir esta figura impositiva, puesto que la LOFCA les impide gravar un hecho imponible ya regulado en un impuesto estatal, aunque sea con un tipo del cero por ciento que impida que se haga efectivo.

Estas medidas suponen un grave desprecio tanto al principio constitucional de que las Comunidades cuenten con autonomía financiera para poder asegurar que los servicios del Estado del Bienestar que son de su competencia (Sanidad, Educación, Políticas Sociales, etc.) como también al propio ordenamiento jurídico y al poder legislativo ya que se emplean vías torticeras como la creación de tributos falsos por razones de interés electoral que además ahondan en el desprestigio y la desconfianza en las instituciones democráticas.

### **Golpe institucional en RTVE**

RTVE ha retrocedido décadas en sólo un año de Gobierno del PP, después de que éste haya liquidado un modelo de televisión pública que garantizó su independencia informativa por vez primera, respetó la capacidad de sus profesionales, demostró su sostenibilidad económica y se ganó el reconocimiento público de los ciudadanos.

El Gobierno de Rajoy ha dado un auténtico golpe institucional en la Corporación RTVE. El instrumento de dicho golpe es el Real Decreto Ley que aprobó, el 20 de abril, el Consejo de Ministros para modificar el régimen de

administración del ente. En base a este Real Decreto Ley – escudándose en la urgencia de adoptar determinadas decisiones de carácter fundamental para la Corporación y alegando el bloqueo en el proceso de negociación para la renovación del Consejo de Administración de RTVE - el Gobierno cambió, para su beneficio, las reglas de la designación de los miembros de dicho Consejo, para hacer descansar esta elección en la mayoría absoluta y no, como venía sucediendo desde 1980, en la mayoría de 2/3 del Parlamento. También se ha reducido, de 12 a 9, el número de los miembros del Consejo de Administración de RTVE y se ha eliminado la remuneración fija de los consejeros, a excepción del Presidente, elegido también exclusivamente por mayoría gubernamental.

Dentro del paquete de primeras medidas urgentes de ajuste presupuestario aprobado por el Gobierno, el 30 de diciembre de 2011, ya se dispuso una reducción de 204 millones de euros en la aportación del Estado a la Corporación y a dicho recorte habrá que sumar los 50 millones que se le han retirado a la subvención al ente en los Presupuestos de 2013.

Los resultados de estos recortes –sumados a la polémica por los ceses fulminantes de algunos de sus profesionales y a los signos evidentes de manipulación informativa - no se han hecho esperar: desde la vuelta del verano, TVE no sólo ya no era líder en audiencia sino que con un 11,2%, se situaba como la tercera televisión más vista, tras Antena 3 (12,7%) y Telecinco (13,8%). En cuanto a los informativos, han pasado en tan pocos meses de un liderazgo incuestionable a estar a un paso de ser superados, por los de las principales cadenas privadas. La pérdida de credibilidad se está convirtiendo en un elemento indisociable de este acusado alejamiento de la ciudadanía hacia la televisión pública. En lo que respecta a RNE, la caída el número de oyentes también se incrementa mes a mes.

Es decir, solo un año de Gobierno del PP ha bastado para poner en cuestión de manera grave la viabilidad económica de RTVE, mermar ya de manera muy ostensible su neutralidad y quebrar su liderazgo de audiencias.

## Igualdad

La política de Igualdad ha perdido toda su dimensión pública desde la llegada del Partido Popular al poder en 2011.

Además, los recortes sociales que está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy demuestran el modelo de sociedad que defiende el PP: una sociedad dual, en la que tendrán todos los derechos y podrán obtener las prestaciones del Estado del Bienestar los ciudadanos y las ciudadanas que puedan comprar el acceso a los mismos, frente a otra parte de la ciudadanía que no pueda hacerlo por lo que perderá prestaciones y derechos, la igualdad de derechos y de oportunidades, uno de los principios básicos que siempre ha defendido el PSOE.

Los recortes sociales del Gobierno de Rajoy tienen una especial incidencia en los derechos de las mujeres, por lo que resultan especialmente graves y preocupantes. Con el gobierno del PP, las mujeres han visto retroceder claramente las leyes y derechos conquistados a lo largo de 30 años de democracia, dado que el gobierno de Rajoy está aprobando leyes que derogan, o dejan en la práctica sin contenido, normas que recogían, en España, derechos propios del Estado del Bienestar.

Así, la reforma laboral, junto a otros drásticos recortes sociales (que implican el desmantelamiento progresivo de la ley de dependencia; el fin de las ayudas en el ámbito educativo...), no sólo han expulsado a miles de mujeres del empleo sino que hacen imposible ejercer su derecho a la conciliación laboral y familiar, plasmado en la ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Resultan especialmente significativos los siguientes recortes:

- Se ha reducido en más de 8 millones de euros (un 27% en solo dos años) el Presupuesto destinado a la Prevención Integral de la Violencia de Género cuando se siguen produciendo casos que exigen que el Gobierno continúe actuando para cumplir la Ley, informar, prevenir y proteger a las

víctimas con el objeto de mantener una lucha que permita atajar definitivamente esta lacra de nuestra sociedad.

- Asimismo, el recorte sobre las políticas de dependencia, tiene un impacto directo sobre la igualdad y la conciliación de la vida personal y laboral puesto que obliga a muchas familias y en concreto a muchas mujeres a renunciar a desarrollar libremente su plan de vida dado que tienen que asumir el cuidado de familiares a quienes el gobierno de la derecha ha recortado un derecho que ya se consideraba adquirido en nuestro país. A finales del mes de noviembre, los recortes del Gobierno habían producido la baja como cotizantes de la Seguridad Social de 145.000 cuidadores que, en su mayoría, son mujeres.

Esta ofensiva del Gobierno contra una Ley crucial para atender las necesidades de personas con necesidad de apoyo y de sus familias, coincidiendo con la mayor esperanza de vida de las generaciones de españoles, ha provocado una extendida contestación social cuya última expresión han sido las masivas manifestaciones de protesta por parte de las personas con discapacidad, uno de los colectivos más afectados, y los cientos de miles de ciudadanos que les han apoyado

### **Reforma de la Ley del aborto**

El Gobierno ha provocado una regresión, especialmente en lo que afecta a los derechos de las mujeres, con el discurso que ha mantenido y los sucesivos anuncios sobre la decisión de aprobar una reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, previsiblemente en el próximo año.

Primero, situando de manera hipócrita el objetivo de la reforma en la protección del derecho a ser madre de las mujeres, como si el derecho al aborto se hubiese convertido en una obligación o una coacción sobre ellas. El Ministro ha llegado a hablar de una “violencia estructural” sobre las mujeres.

Segundo, perfilando a medida que ha pasado el tiempo, el contenido de la reforma en términos cada vez más regresivos, hasta el punto de pretender

derogar de facto no solo la legislación actual sino el modelo de 1985 del que tan sólo permanecería el supuesto del daño psicológico que sufrirían las mujeres.

Como resultado de este deslizamiento hacia posiciones ultraconservadoras del Gobierno, sin duda pasaremos de una legislación homologada a la de la mayoría de los países europeos a una de las más regresivas en este ámbito.

### **El fin de la Justicia gratuita**

La Administración de Justicia ha sido uno de los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho, porque ha permitido que se acceda a ella con independencia de los recursos económicos o posición social, y también porque en los órdenes civil, laboral y contencioso-administrativo, el poder judicial cumple además una función tuitiva de quienes afrontan los procesos en mayor situación de desventaja.

El Gobierno, con el telón de fondo de la crisis y la economía procesal, ha realizado una reforma tendente a reducir juzgados en el territorio y posteriormente a convertir el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia en un nuevo sistema recaudatorio con el establecimiento de tasas abusivas; es decir, convertir un derecho de todos a la tutela judicial, en un privilegio reservado a unos pocos.

Para justificar esta contrarreforma no se ha dudado en tildar de “cara” la justicia en nuestro país, aunque el Consejo General de la Abogacía haya establecido que la Justicia Gratuita solamente supone un 6,5% del total del esfuerzo de gasto que realizan todas las administraciones públicas en el sistema judicial; como de intentar justificar que con la reforma se mejorará y aumentará la asistencia jurídica gratuita de las personas más desfavorecidas. Con la reforma de la Ley de Tasas planteada por el Gobierno del PP, un recurso a una sentencia laboral ante un tribunal superior, que antes era gratuito, supondrá pagar en torno a 750 euros solo en tasas.

Este sistema de tasas ha logrado el consenso de todos los sectores judiciales (abogados, procuradores, secretarios judiciales, fiscales, jueces y magistrados) en denunciar que la justicia se ha convertido en un privilegio y pedir su derogación inmediata.

Poco más de un año después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el Gobierno de Rajoy procede a una nueva reforma para hacer que nuestro ordenamiento penal, considerado como uno de los más avanzados en Europa, retroceda en aspectos esenciales; así la contrarreforma de la derecha plantea la cadena perpetua, desconocida en nuestro sistema de justicia, orientado a la reinserción social de los condenados, y encubierta como prisión permanente revisable.

Además en un contexto de fuerte contestación social a la política de recortes de Mariano Rajoy, altos cargos del PP han llegado a plantear la posibilidad de modificar el derecho fundamental de los ciudadanos a manifestarse.

## **Medio Ambiente**

El Gobierno de Rajoy está dando, uno tras otro, todos los pasos para desandar el camino de un modelo económico de crecimiento compatible con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. En este terreno, se ha llevado a cabo un catálogo de actuaciones que configuran una gestión sumamente regresiva; el abandono de las estrategias que se habían llevado a cabo en los últimos años amenaza con abocarnos a un escenario de desprotección medioambiental muy preocupante y la repetición de planteamientos desarrollistas, muchos de los cuales son causa de la grave crisis económica que estamos padeciendo

Con el Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de Medio Ambiente, el Gobierno del PP hace más laxa la capacidad y uso de protección de nuestros limitados recursos naturales, pone en marcha una operación encubierta de privatización del agua y resta contenido a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

Con la reforma de la Ley de Costas, se abre una vía de franca desprotección de las costas españolas. Un compendio de medidas “a la carta” que más bien responden a intereses privados, muy alejada de una norma cuyo objetivo principal debe ser la protección del litoral y la defensa del interés general. Con claridad, representa, un grave retroceso con respecto a la regulación vigente y contradice también la normativa comunitaria y va en dirección contraria a los resultados publicados en estudios e investigaciones científicas.

Por otra parte, el Gobierno ha abierto una traumática crisis en el sector de la minería del carbón, reduciendo las ayudas del Estado al sector – 63% menos en los Presupuestos de 2012 - y de hecho ha liquidado el calendario de reducción progresiva, tal y como había garantizado el anterior Gobierno; en suma, se viene a anticipar en seis años el cierre de la minería en España con perjuicios fatales para miles de mineros, sus familias y comarcas enteras que preveían, y se les había hecho posible, una transición hasta el 2018.

El medio rural español es uno de los ámbitos más gravemente perjudicados por la actuación del Gobierno, al acusar tanto el impacto de los recortes en las distintas políticas de Gobierno (por señalar una, el cierre de escuelas rurales afectará a miles de familias) como los recortes en las actuaciones que, hasta este año, se habían dirigido a protegerlo. En los dos últimos presupuestos, se ha reducido hasta lo más exiguo – en el 90% - los recursos destinados a dotar de contenido la Ley del año 2007 que favorecía un desarrollo integral y cohesionado a través de la cooperación con las Comunidades Autónomas. Puede concluirse que el Gobierno del PP ha abandonado desde su primer año el mundo rural de este país en el que viven, con mayor precariedad de medios a los que lo hacen en ciudades, miles de familias; las estrategias para protegerlo y promover su desarrollo ya no forman parte de la agenda del Gobierno.

Finalmente, el sector energético ha sufrido especialmente la carencia de proyecto del Gobierno para hacer frente al denominado déficit tarifario y una imprescindible reforma de nuestro sistema eléctrico. No existe una estrategia energética de gobierno sino una sucesión de actuaciones aisladas cuyo

resumen es que se carga sobre el consumidor y empresas un alza insoportable de los precios sobre los que recaerá el 80% del incremento impositivo que se quiere aplicar a los productores de electricidad. Las subidas del mes de abril (7%) y junio (3,95%), unida al alza del IVA (del 18% al 21%) han encarecido la factura desde el mes de abril en un 14% y, con el Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética lo harán en un 6/7% más. Es decir, cuando esté en vigor, desde que gobierna el PP, la energía será un 20% más cara para los hogares españoles.

Y también, cuando en gran parte de Europa está abierta la puerta al abandono de la energía nuclear y se potencian las fuentes energéticas limpias, el Gobierno de Rajoy ha frenado las inversiones en energías renovables, desperdiciando el liderazgo de España, desaprovechando este gran potencial de competitividad y poniendo en riesgo los empleos de este sector.

**PSOE**